

ACUERDO: CG-IEEPCO-SNI-99/2013, RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE CONCEJALES AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, QUE ELECTORALMENTE SE RIGE POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respecto de la elección de concejales al ayuntamiento del municipio de Santa Catarina Mechoacán, que electoralmente se rige por Sistemas Normativos Internos, que se genera a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN

- 1. Acuerdo CG-IEEPCO-SNI-1/2012.** El 17 de noviembre de 2012 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobó el Catálogo General de los Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, entre ellos, al municipio que nos ocupa.
- 2. Emisión de la Convocatoria por el ayuntamiento.** Con fecha 19 de agosto del 2013 el Ayuntamiento de Santa Catarina Mechoacán, emitió la convocatoria para la elección de concejales municipales para el periodo administrativo 2014-2016.
- 3. Aprobación de la Convocatoria por la asamblea.** Con fecha 01 de septiembre de 2013 la Asamblea General Comunitaria de Santa Catarina Mechoacán, emitió la convocatoria para la elección de concejales municipales para el periodo administrativo 2014-2016.

B. JORNADA ELECTORAL Y SUS RESULTADOS

- 1. Asamblea General Comunitaria.** El 22 de septiembre de 2013 se realizó la Asamblea General Comunitaria, convocada para celebrar la elección de concejales municipales.
- 2. Elección del órgano electoral municipal.** El mismo día, durante el desarrollo de la Asamblea General Comunitaria, se eligió a los ciudadanos que integrarían la Mesa de Debates, órgano encargado de conducir los trabajos de la jornada electoral, resultando designados los siguientes:

CARGO	MESA DE DEBATES
	NOMBRE
Presidente	Dionicia Brigida Hernández García
Secretario	Santiago Antonio Hernández Mejía
Primer Vocal	René Cruz de Olmos
Segunda Vocal	Juan Manuel López García
Tercer Vocal	Filogonio Vásquez García

3. Del procedimiento de la votación. Así mismo, la asamblea aprobó la participación de los candidatos de cada grupo, en ternas, para las elecciones del síndico y regidores, así mismo, en el caso de la elección de Presidente Municipal fueron presentados cuatro candidatos.

4. Computo municipal. El día de la jornada electoral la Mesa de Debates concluyó el computo municipal de la elección, arrojando los siguientes resultados:

CANDIDATOS A PRESIDENTE	VOTOS	
	CON NUMERO	CON LETRA
Tomas Quiroz García	458	Cuatrocientos cincuenta y ocho
Caín Nicolás Hernández	99	Noventa y nueve
Cayetano Hilario García Hernández	587	Quinientos ochenta y siete
Luciano Vásquez Hernandez	244	Doscientos cuarenta y cuatro

De la misma manera, quedó asentado en el acta levantada durante la jornada electoral, la votación recibida de todos y cada uno de los candidatos que contendieron por los cargos de síndico y regidores.

C. CONTROVERSIAS Y MEDIACION

1. Controversia. El 25 de septiembre de 2013 se recibió escrito promovido por los ciudadanos Bulmaro Rodríguez Cedeño y Enedina Ávila López, Presidente Municipal y Secretaria Municipal respectivamente, por medio del cual informan incidentes acontecidos durante la Asamblea

General Comunitaria celebrada el día 22 de septiembre de 2013, relativa a la elección de concejales municipales.

2. Controversia. El 25 de septiembre de 2013 el ciudadano Tomas Quiroz García y otros, presentaron escrito mediante el cual se inconforman medularmente de lo siguiente:

"1.- NO SE SOMETIÓ A CONSENSO A LA ASAMBLEA EL ACTA DEL DÍA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE TODOS LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA.

2.- SE REGISTRARON LOS CANDIDATOS SIN RESPETAR LA CONVOCATORIA

3.- DURANTE LA VOTACIÓN HUBO CIUDADANOS QUE VOTARON DOS VECES, YA QUE NO SE USO TINTA INDELEBLE.

4.- NO SE RESPETO EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE PEDIR CREDENCIAL DE ELECTOR A LOS MENORES DE EDAD. (sic)

5.- HUBO DESORDEN TOTAL DONDE SE ENCONTRABA EL PIZARRÓN PARA VOTAR.

6.- FALTO VIGILANCIA ESTRICTA DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN LA HORA DE VOTACIÓN.

7.- HUBO AGRESORES CONTRA LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE DEBATES.

8.- POR PARTE DEL CANDIDATO CAYETANO HILARIO GARCÍA HERNÁNDEZ HUBO CIUDADANOS PEGADOS AL PIZARRÓN QUE SEÑALABAN DONDE HAY QUE VOTAR.

9.- DE TODAS ESTAS ANOMALÍAS LOS CIUDADANOS TOMARON LA DECISIÓN DE ABANDONAR LA ASAMBLEA EN SU MAYORÍA, DE IGUAL FORMA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL PRESIDENTE DE USOS Y COSTUMBRES SE RETIRARON POR LO LA (sic) ASAMBLEA NO TUVO LA LEGALIDAD.

...POR LO QUE SOLICITAMOS UNA NUEVA ASAMBLEA PARA LA ELECCIÓN DE MANERA TRANSPARENTE Y LEGAL.

3. Reunión de mediación. El 25 de septiembre 2013 comparecieron ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos los ciudadanos Cayetano Hilario García Hernández, Antonio Rodríguez Ávila, Francisco Sabino Nicolás Castañeda, Calixto Juan Hernández Cajero, Santiago D. Olmos Cajero, Rufina Quiroz Gómez, Bruno Mejía García, José Quiroz Martínez, Nazario Celestino Hernández Hernández, Eneida Eloina Jarquín Galindo, Felipe Juan Hernández, Jacinto Joaquín D. Olmos, Noel García Hernández, Bruno Ávila Cruz, Quienes en su calidad de concejales municipales electos y ciudadanos de la comunidad manifestaron esencialmente que la Asamblea General Comunitaria se desarrolló en calma, así mismo, se hizo entrega del expediente de la elección.

4. Escrito de inconformidad. El 01 de octubre de 2013 el ciudadano Tomas Quiroz García y otros, presentaron escrito de inconformidad por el cual solicitan:

- Que no se de validez a la asamblea realizada el 22 de septiembre de 2013;
- Que se convoque a una segunda asamblea con la intervención del instituto;
- Que se les convoque a una mesa de diálogo para dirimir diferencias y acordar las bases para una próxima asamblea.

5. Controversia. El día 01 de octubre el ciudadano Pablo García Quiroz y otros, en su calidad de tatamandones de la comunidad, presentaron escrito por el cual solicitan se convoque a una nueva asamblea donde estén presentes representantes del instituto.

6. Reunión de mediación. El 10 de octubre de 2013 se realizó una reunión de trabajo entre las partes en conflicto y la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, después de diversas intervenciones, se acordó realizar una reunión el día 18 de octubre de 2013.

7. Reunión de mediación. El 18 de octubre de 2013 se realizó una reunión de trabajo entre las partes en conflicto y la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, después de un amplio dialogo, no se logró alcanzar acuerdos para la resolución del conflicto.

8. Nueva elección. El 23 de octubre de 2013 se recibió en este órgano el acta de Asamblea General Comunitaria realizada el 20 de octubre de 2013, por la cual se informa que determinaron celebrar una nueva elección a celebrarse el domingo 27 de octubre del mismo año.

9. Juicio ciudadano. El 25 de octubre de 2013 Cayetano Hilario García Hernández, promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano del Régimen de Sistemas Normativos Internos, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

10. Sentencia. El 26 de octubre de 2013 el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, al resolver el juicio precisado en el punto que antecede, determinó reconducirlo para su atención al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

11. Informe de la celebración de una segunda elección. El 30 de octubre el ciudadano Bulmaro Rodríguez Cedeño, Presidente Municipal, remitió el acta de Asamblea General de Comunitaria, celebrada el día 27 de octubre del presente año, en la que informan de la celebración de nuevos comicios.

12. Solicitan se valide elección. El 11 de noviembre de 2013 los ciudadanos Tomas Quiroz García, Caín Nicolás Hernández, Luciano Vásquez Hernández, en su calidad de candidatos que participaron en la segunda elección, promovieron escrito mediante el cual solicitaron la validación de la segunda elección.

13. Reunión de mediación. El 12 de noviembre de 2013 compareció ante la Dirección de Sistemas Normativos Internos el ciudadano Cayetano Hilario García Hernández, para solicitar que se dé por terminada la etapa de conciliación y que el caso de Santa Catarina Mechoacán tome un curso legal.

14. Declaración de integrantes de la Mesa de los debates. El 16 de noviembre de 2013 mediante sendos escritos promovidos por los ciudadanos Dionisia Brigida Hernández García, Santiago Antonio Hernández Mejía y René Cruz de Olmos, en su calidad de Presidenta, Secretario y Primer Vocal de la Mesa de los Debates de la asamblea

celebrada el 22 de septiembre de 2013, en el primer ocurso, medularmente manifiestan:

"... El presidente municipal Lic. Bulmaro Rodríguez Cedeño, nos presionaron y obligaron con encerrarnos en la cárcel municipal, si en el acta de asamblea no redactábamos o asentábamos una serie de irregularidades o incidencias y que las mismas habían acontecido en la asamblea general por lo que anotamos todas esas irregularidades contra nuestra voluntad por la presión que se ejercía contra nosotros..."

En el segundo escrito, se remite el instrumento notarial numero 9655, levantado por el Licenciado Benjamín Fernando Hernandez Bustamante, Notario Público número 79 del Estado de Oaxaca, levantado el día 03 de octubre de 2013.

En dicho instrumento, se asientan las declaraciones de los ciudadanos Dionisia Brigida Hernández García, Santiago Antonio Hernández Mejía y René Cruz de Olmos, en su calidad de Presidenta, Secretario y Primer Vocal de la Mesa de los Debates de la asamblea celebrada el 22 de septiembre de 2013, en los términos siguientes:

"AL MOMENTO DE LEVANTARSE EL ACTA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE LA ELECCIÓN, NO SE PRESENTO NINGUNA INCIDENCIA DENTRO DE LA JORNADA ELECTORAL, YA QUE SE DIO EN TOTAL CALMA, EN FORMA PACÍFICA Y QUE DENTRO DE LA MISMA SE UTILIZÓ LA TINTA INDELEBLE PARA CONTROL DE LOS VOTANTES EN LA JORNADA ELECTORAL QUE AL CIERRE DEL ACTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL BULMARO RODRIGUEZ CEDEÑO CON LOS INTEGRANTES DE SU CABILDO Y LOS CANDIDATOS PERDEDORES DE NOMBRES : TOMAS QUIROZ GARCIA, CAIN NICOLAS HERNANDEZ Y LUCIANO VASQUEZ HERNANDEZ NOS PRESIONARON A LOS QUE HABÍAMOS FUNGIDO COMO INTEGRANTES DE LA MESA DE LOS DEBATES OBLIGÁNDONOS Y AMENAZÁNDONOS CON ENCERRARNOS EN LA CÁRCEL MUNICIPAL EN ESOS MOMENTOS, ADEMÁS DE CONDICIONARNOS CON NO FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE CIUDADANOS QUE HABÍAMOS LEVANTADO, SI EN LA MISMA NO SE ANOTABA UNA SERIE DE INCIDENCIAS, QUE NO LAS HUBO DURANTE DICHA JORNADA ELECTORAL ANTE LAS AMENAZAS Y LA PRESIÓN EMITIDAS HACIA NOSOTROS NOS VIMOS OBLIGADOS EN ASENTARLAS..."

D. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTAMEN

1. Integración del expediente. Una vez agotado el dialogo, se integró el expediente y la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos ordenó su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.

2. Dictamen. En su oportunidad, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos formuló el presente dictamen y lo presentó al Consejo General para los efectos conducentes, en los términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción XI, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción XLIV, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con lo previsto por el artículo 114, apartado B, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca corresponde pronunciarse sobre la validez de las elecciones del Régimen de Sistemas Normativos y, en su caso, otorgar las constancias respectivas.

Lo anterior, en atención a que se trata de un municipio que elige a sus autoridades municipales en el marco lo previsto por los artículos 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vinculados con los tratados internacionales en materia de derechos y cultura indígena suscritos por el Estado mexicano.

SEGUNDO. CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

A efecto de realizar la calificación de la elección de concejales municipales, debe tenerse presente el marco constitucional y legal conforme al cual ha de determinarse la validez de tal elección:

A. MARCO NORMATIVO

En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, que: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del mismo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De lo anterior deriva, que al decidir cualquier cuestión concerniente a la integración de los poderes públicos, debe privilegiarse la voluntad del pueblo.

En el párrafo segundo del artículo 41 constitucional se establece, que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo con las bases que se indican en la propia Constitución.

En resumen, los principios constitucionales que deben observarse en comicios democráticos para la renovación de, entre otras, las autoridades municipales son: elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad; organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

En cuanto al tema de derechos humanos, el artículo 1º constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.

En adición, la Constitución impone que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Por lo que se refiere a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2° apartado A, fracción VII, establece que la Nación Mexicana es única e indivisible. La cual tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En ese sentido, la Constitución define que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Además, que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

De modo más directo, se destaca que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Dentro de esta relación, la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
- Entre otras.

Bajo estas premisas, se determina que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en las

legislaciones de las entidades federativas, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

En congruencia con lo antes expuesto, el artículo 16 de la Constitución local, proclama la composición étnica plural del Estado de Oaxaca, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran, mencionando expresamente los Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques.

En esencia, la Constitución Local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la libre determinación expresada como autonomía, gozando incluso de personalidad jurídica de derecho público; así como derechos sociales, tales como: sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, jurisdicción sobre sus territorios, acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, participación en el quehacer educativo y en los planes de desarrollo, formas de expresión religiosa y artística, acervo cultural y, en general, los mecanismos de protección para todos los elementos que configuran su identidad.

Para asegurar tales prerrogativas, impone al legislativo local establecer en la ley reglamentaria las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, con el objeto de que sean ejercidas directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes legalmente los representen, entre otras, las formas de organización social, política y de gobierno, y los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas.

Una vez destacado lo anterior, los artículos 25, 27, 29, 31 y 67, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, fundamentalmente, se encargan de desarrollar para el ámbito local, las disposiciones necesarias para configurar un gobierno republicano, representativo y popular, el cual, según expresa el numeral 29, tiene como base de su organización política y administrativa, el municipio libre.

En ese orden de factores, los artículos 114, primer párrafo, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1º, párrafo

1, Fracciones II y III, 4, numeral 1 y 2, 14, párrafo 1, fracciones I, II y VII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, instituyen que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones que cuenta con atribuciones, entre otras, coadyuvar en la preparación y desarrollo de las elecciones del régimen de Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, así como resolver las controversias que se presenten, emitir la declaratoria de validez y, en su caso, el otorgar las constancias respectivas.

A su vez, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales es el cuerpo legal encargado de regular, entre otras cuestiones, lo relativo a los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía, así como la función estatal de organizar y vigilar las elecciones de los ayuntamientos.

En el Libro Sexto, el Código regula la renovación periódica de las autoridades municipales, que electoralmente se realizan mediante Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas.

En su artículo 255, se establecen las bases conceptuales de este tipo de procesos electorales, las cuales resultan aplicables en todos los municipios que electoralmente se rigen por los Sistemas Normativos Internos, en los siguientes términos:

“Artículo 255

- 1. Las disposiciones de este libro serán aplicables en todos aquellos municipios, que en el ejercicio de su derecho a libre determinación expresada en su autonomía, electoralmente se rigen por sus propios sistemas normativos internos.*
- 2. Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los*

hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Soberanía del Estado.

3. Las disposiciones contenidas en el presente Libro, son reglamentarias de los artículos 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, y tienen como objeto respetar, vigilar y sancionar los procedimientos electorales de los municipios y comunidades indígenas.

4. En este Código se entiende por sistemas normativos internos, los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal.

*5. El procedimiento electoral en el régimen de sistemas normativos internos, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. **Estos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y el levantamiento de las actas correspondientes.***

6. El Instituto será garante de los derechos tutelados por los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, y 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, para salvaguardar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresada en sus sistemas normativos internos y la autonomía para elegir a sus autoridades o gobiernos locales; así como en el reconocimiento a la diversidad de culturas y sistemas normativos existentes en el Estado.

7. Las normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizarán que las mujeres disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas."

A partir de ello, en congruencia con los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, el Código de la materia en su artículo 257, párrafo 1, fracciones I, II, y III, se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos indígenas, entre otros, el de actuar de conformidad con las disposiciones que rijan la vida interna de sus municipios, el de participar en la permanente renovación y actualización de sus sistemas, así como cumplir con los cargos, servicios y contribuciones que la Asamblea les confiera.

Por lo que respecta a los requisitos de elegibilidad, los ciudadanos deben contar con las cualidades indicadas por el artículo 258 del Código, para estar en aptitud de resultar electos.

En cuanto a los actos previos a la elección a los que deben ajustarse los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus autoridades municipales, se establecen en los artículos 259 y 260 del Código.

En este orden de factores, en el artículo 261 del Código se disponen las reglas relativas a los actos correspondientes a la jornada electoral.

Se distingue en la norma, una prohibición expresa de intervención en dichos comicios dirigida hacia los partidos políticos, en su artículo 262.

En razón de lo anterior, este órgano debe realizar previamente una revisión respecto del cumplimiento de los requisitos de validez de la elección, a que hace referencia el artículo 263 de la normatividad multicitada.

Desde luego, que la satisfacción de los elementos fundamentales señalados con anterioridad permite considerar a una elección como producto del ejercicio popular de la soberanía, realizada dentro del sistema jurídico-político construido en las constituciones federal y local, así como de los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas y las demás disposiciones particulares de la elección.

Bajo esas premisas, puede decirse que este Consejo General estaría en condiciones de emitir la declaración de validez de la elección y, en su caso, expedir las constancias respectivas.

B. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA

Las peticiones planteadas por la parte compareciente resultan inatendibles en unos casos, e inoperantes en otros, por los motivos y razones que a continuación se precisan:

1. Mediación como sistema alternativo para la solución de conflictos.

El artículo 266, párrafo 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, concibe la mediación electoral como un medio alternativo para la solución de los conflictos, a través del cual las partes resuelven directamente una controversia con la intervención o colaboración del instituto.

Conforme la disposición jurídica anotada, debe decirse que esta alternativa de resolución de los conflictos electorales está basada en los criterios de la democracia, la pacificación social, la tolerancia, el **diálogo**, el respeto y **el consenso**.

En ese contexto, el fin último del proceso de mediación se encuentra definido de manera categórica por el artículo 266, párrafo 1, del Código, cuando nos indica que la mediación tiene por objeto *“construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos”*.

Ahora bien, debe diferenciarse cuando la conciliación se encuentra establecida como etapa del proceso judicial o anterior al mismo; de aquellos sistemas, como el nuestro, que la reglamentan como una mera facultad del órgano administrativo electoral.

Esas diferencias surgen cuando la conciliación se impone como etapa previa a la introducción al proceso judicial, cuya naturaleza preventiva tiende a convertirse en un proceso autónomo cuando logra alcanzar el objetivo de avenencia.

En cuyo caso, la conciliación sería obtenida desde la especialidad de su objeto, es decir, que no interesa el objeto material que discute la litis sino el acuerdo logrado desde el acto de avenencia. Es así, que cualquier forma convenida entre las partes responde a decisiones propias de quienes las asumen.

De este modo sería posible confirmar que existe un proceso de conciliación independiente porque tiene partes, tiene un órgano que intermedia y pacifica -*verbi gratia juez de paz*- y consigue un resultado útil y efectivo al interés de los comparecientes.

Esta condición demuestra que cuando se habla de conciliación no se piensa en el sentido estricto del término, sino en un sentido más amplio que tolera la declinación de los intereses, el sometimiento absoluto y la misma transacción o renuncia recíproca a posiciones procedentes irreductibles.

Ahora bien, en la especie debe traerse a colación lo establecido por el artículo 264 del Código, el cual establece dos hipótesis normativas para que el órgano administrativo electoral se encuentre en aptitud de instaurar un proceso de mediación, a saber:

I. Controversias por actos de la jornada electoral o su resultado. La primera de ellas, se refiere a los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e integración de los órganos de gobierno, según lo dispone el artículo en cometo, en su el párrafo 2.

Se puede arribar a la conclusión anterior, partiendo de la premisa que nos otorga el texto normativo analizado, debido a que en él destacan los vocablos “*renovación e integración*” en referencia a los órganos de gobierno.

En ese sentido, la Real Academia de la Lengua española establece que el vocablo -*renovación*- es la “*Acción y efecto de renovar.*”; por otra parte, el caso del vocablo -*integración*- resulta de la “*Acción y efecto de integrar o integrarse.*” La importancia de tales expresiones nos permiten afirmar, según los contextos en las que aparecen los vocablos, que se refieren precisamente al momento en que inicia la jornada electoral, sus resultados y la calificación de la elección correspondiente.

De allí, que puede sostenerse válidamente que una vez celebrada la jornada electoral no pueden cuestionarse las normas, procedimientos y prácticas que se llevan a cabo al interior de las comunidades indígenas para la elección de sus representantes, que hayan sido previamente aprobadas o incluso durante el desarrollo de sus propios comicios, debido

a que se estiman como disposiciones particulares de la elección, generadas en el ejercicio pleno de su derecho fundamental de autonomía para la designación de sus representantes municipales.

Para arribar a tal convicción, además debe tomarse en cuenta el dispositivo Constitucional referente al principio de definitividad de los actos y etapas del proceso electoral, para poder concluir que el acto administrativo-electoral de calificación de la elección, en la hipótesis analizada, debe limitarse solamente a la revisión de los requisitos previstos por el artículo 263, párrafo 1, fracciones I, II, III del Código de la materia y, en su caso, a la violación a los derechos político-electorales de votar o ser votado.

Esa cuestión se corrobora, con la lectura del párrafo primero del artículo 265 del código en cita, que establece que en los casos de controversias que surjan desde la realización de los comicios y hasta antes de emitir el acuerdo de calificación de la elección, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos podrá solicitar la opinión de instituciones públicas calificadas para emitir criterios respecto de los Sistemas Normativos Internos.

No obstante lo anterior, la normatividad establece el imperativo a este órgano para que previamente a cualquier resolución se busque la conciliación entre las partes. Eso será factible, mediante el despliegue de un proceso de mediación, desde luego, siempre que se logre construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos.

Pues es así, como este órgano podría determinar alguna de las variables de solución previstas en los párrafos del dispositivo 265 del Código invocado, incluso otras, pero siempre derivadas de la negociación, la autotutela o la autocomposición de las partes.

En la hipótesis analizada, tratándose de irregularidades no vinculadas a las disposiciones previstas por el artículo 263 del Código, formuladas contra actos u omisiones vinculadas a la jornada electoral o a sus resultados, en las que propósito buscado es la nulidad de la elección, no resultan de la competencia de este órgano administrativo electoral el resolverlos, como se demostrará más adelante.

II. Controversias por actos previos a la jornada electoral. La segunda de la hipótesis, se refiere a los casos en que se manifieste alguna inconformidad con las reglas del Sistema Normativo Interno según lo previsto en párrafo 3, del dispositivo legal que se analiza.

En esta variante, la legislación obliga a este órgano electoral a proveer lo suficiente, necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a sus autoridades municipales, conforme sus Sistemas Normativos Internos. Además nos impone el deber propiciar la conciliación, por los medios a nuestro alcance, aplicando la consulta a los ciudadanos que residen en el municipio de que se trate.

Por lo tanto, el órgano administrativo electoral debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios, a partir de conciliar las diversas posiciones que surjan hasta antes de la jornada electoral cuando se trate de divergencias respecto de las reglas con las cuales se desarrollara el proceso electoral y hasta antes de la celebración de la jornada electoral.

Al respecto, existe un criterio regulador derivado de la Jurisprudencia 15/2008, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señalan:

Joel Cruz Chávez y otros

VS

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras

Jurisprudencia 15/2008

COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De los artículos 2, apartado A, fracciones III y VII y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 58 y 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, se desprende que las autoridades electorales están obligadas a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme al sistema de

usos y costumbres, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance, como es la consulta con los ciudadanos que residen en el municipio. La autoridad electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios.

4ta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2542/2007.—Actores: Moisés Ramírez Santiago y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Notas: El contenido de los artículos 58 y 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el cual se interpreta en esta jurisprudencia actualmente corresponde con los diversos 79 y 143 respectivamente, del código vigente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 16 y 17.

Ahora bien, es evidente que cualquier variable de solución se encuentra inmersa en el proceso alternativo de resolución de conflictos, por consiguiente, solo pueden ser determinadas por este órgano administrativo electoral con la avenencia de las partes.

Precisado lo anterior, debe establecerse que el caso que nos ocupa corresponde a la primera de las hipótesis, pues se trata medularmente de discrepancias surgidas con posterioridad a la jornada electoral y su resultado, las cuales se atienden a efecto de garantizar el derecho de petición de los comparecientes, en virtud de que no se logró la avenencia de las partes en esta instancia administrativa electoral.

En atención al principio de definitividad de los actos y etapas de los procesos electorales, y ante la víspera del día primero de enero de 2014, día establecido en la ley para celebrar la toma de protesta en el municipio que nos ocupa, resulta oportuno concluir la etapa de mediación en esta instancia administrativa electoral.

En adicción a lo anterior, no debe pasar como desapercibido que en términos del artículo 84, párrafos 2 y 4, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, durante la tramitación de un medio de impugnación las partes podrían solicitar la continuación del proceso conciliatorio ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder judicial de Oaxaca. Así mismo, que en el caso de alcanzarse algún acuerdo de solución del conflicto, cuenta con atribuciones para elevar a rango de sentencia lo convenido, por lo tanto, queda a salvo su derecho a la auto composición de sus desavenencias.

2. Precisión de la controversia. La causa de pedir se circunscribe esencialmente a que este órgano administrativo electoral declare validos los actos relativos a la segunda elección, celebrada 27 de octubre del presente año.

En efecto, dicho planteamiento se genera sobre la base de que en la Asamblea General Comunitaria, celebrada el día 22 de septiembre de este año, acontecieron diversas irregularidades¹ que a juicio de los comparecientes resultaron suficientes para “acordar” la realización de una nueva elección

3. Atribuciones del Instituto. Los artículos 264, párrafos 1 y 2 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el

¹ Las cuales se precisan en el numeral 2 del apartado C de los antecedentes del presente acuerdo.

Estado de Oaxaca, establecen que el Consejo General debe conocer las controversias respecto de la renovación e integración de las autoridades que se eligen mediante los sistemas normativos internos de los pueblos y las comunidades indígenas.

Este precepto otorga atribuciones al Consejo General para atender las controversias que se presenten mediante la implementación de un proceso de mediación electoral en el que se busque la conciliación entre las partes, en los casos y términos que ya fueron abordados con anterioridad.

Sin embargo, resulta importante enfatizar que en términos de lo previsto por el artículo 41, fracciones VI, VII, VIII y IX, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos la implementación de las tareas que se deriven en la aplicación de dicho método alternativo de solución de conflictos, sin embargo, no cuenta con atribuciones para dirimir las controversias mediante la imposición de un lado sin la concurrencia de las partes en tal acuerdo.

De la misma manera, no debe perderse de vista que lo previsto por el artículo 26, fracción XLIV, del Código solo establece atribuciones al Consejo General para emitir un acto declarativo, sobre la validez o no de un proceso electoral desarrollado por el régimen de sistemas normativos internos.

Es decir, dicha declaratoria se encuentra solo vinculada a la función estrictamente administrativa, y no jurisdiccional, consistente en efectuar las verificaciones respecto al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales a que debe ajustarse tal elección para estimarse válida, desde luego, en el marco del derecho a la auto determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

4. Atribuciones del Tribunal. Por su parte, el artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dispone que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca es el Tribunal Estatal Electoral.

Ahora bien, entre las atribuciones que se le confieren al órgano jurisdiccional, se encuentran la de conocer los recursos y medios de

impugnación respecto de las elecciones que se realizan mediante Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas, y las demás controversias que determine la ley respectiva; así como la declaración de nulidad de una elección, por las causas expresamente establecidas en la ley, como a continuación se demuestra:

“De los Tribunales Especializados

(Reformado mediante decreto No. 397, publicado el 15 de abril de 2011)

Artículo 111.- *El Poder Judicial contará con Tribunales Especializados, de carácter permanente, autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones, los cuales contarán con las siguientes características y atribuciones:*

I.- Sus resoluciones en el ámbito de su competencia serán definitivas e inatacables en el orden local;

II.- ...”

Los Tribunales a los que se refiere el primer párrafo de este artículo son los siguientes:

A. El Tribunal Estatal Electoral, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca, y tendrá las siguientes atribuciones:

*I.- Conocer de los recursos y medios de impugnación que se interpongan respecto de las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados y Concejales de los Ayuntamientos por los regímenes de partidos políticos y **de usos y costumbres**, de la revocación de mandato del Gobernador del Estado, **así como de todas las demás controversias que determine la ley respectiva;***

II.- ...

III.- ...

*IV.- El Tribunal Estatal Electoral **podrá decretar la nulidad de una elección por causas expresamente establecidas en la ley.** Se preverán los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias de impugnación, tomando en cuenta el principio de definitividad de los procesos electorales;*

V. ...

VI. (sic) Las demás atribuciones que le confieran esta Constitución y la Ley.

Adicionalmente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, en su Libro Tercero denominado “De los Medios de Impugnación y las Nulidades en las Elecciones de municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos”, entre otras, establece las siguientes:

“Artículo 80.

Los medios de impugnación regulados en este libro tienen por objeto garantizar:

- a) La Legalidad de los actos de las autoridades electorales, que resulten vinculatorios con la preparación o desarrollo de los procesos electorales; **a fin de salvaguardar el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas democráticas de gobierno**, su identidad, cultura, cosmovisión, protección de sus prácticas políticas tradicionales y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural y sus instituciones político-electorales.*
- b) Que los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se sujeten invariablemente a las normas, principios, instituciones, procedimientos y prácticas electorales de los pueblos y las comunidades indígenas; y*
- c) **La definitividad de los distintos** actos y etapas del procedimiento electoral dentro del Sistema Normativo Interno.*

Artículo 81.

El sistema de medios de impugnación en los Municipios que electoralmente se rigen por los Sistemas Normativos Internos, se integra por:

- a) **Juicio electoral** de los Sistemas Normativos Internos (sic)*
- b) **Juicio para la protección** de los derechos político electorales del ciudadano dentro del régimen de los Sistemas Normativos Internos.”*

“Artículo 84.

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en este Libro, serán ofrecidas, admitidas y valoradas las pruebas que establece esta Ley, preservando los principios institucionales y los procedimientos electorales que se han puesto en práctica durante los tres últimos procesos electorales o los acuerdos adoptados por la asamblea general comunitaria u otros órganos legitimados por las comunidades.

2. En los casos correspondientes **deberán privilegiarse los acuerdos o pactos tomados por la colectividad a través de la asamblea o de otras instancias u órganos legitimados por la comunidad, respetando los principios que dan cohesión interna e identidad cultural al pueblo indígena de que se trate.**

3. En los casos en que se encuentren en conflicto derechos colectivos plenamente justificados por la comunidad en contra de derechos o prerrogativas individuales, deberá resolverse armonizando o preservando los colectivos.

4. **Si durante la tramitación del juicio ante el Tribunal, una de las partes solicita iniciar o continuar un proceso conciliatorio, el Tribunal dará vista a la contraparte y, en caso de existir conformidad y siempre que los plazos procesales lo permitan, decretará la suspensión del procedimiento por única ocasión y por un plazo no mayor a quince días, para dar lugar a la conciliación. En caso de que las partes logren un acuerdo para dirimir la controversia, el Tribunal calificará dicho acuerdo y en su caso lo elevará a calidad de sentencia con autoridad de cosa juzgada. La conciliación a que se refiere este apartado se entenderá como derecho permanente de las partes hasta antes de dictar sentencia.**

Artículo 85.

*El Tribunal **recabará de oficio** y ordenará el desahogo de los medios de prueba que estime necesarios para resolver la controversia planteada."*

"Artículo 88.

*Para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales y la salvaguarda de las normas, principios, instituciones, procedimientos y prácticas electorales de los pueblos y las comunidades indígenas, en los términos señalados en este Libro, **podrá interponerse el Juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos.**"*

"Artículo 89.

El Juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos, procede contra:

a) Los actos o resoluciones del Consejo General, que causen un perjuicio al promovente que tenga interés jurídico;

b) Los actos o resoluciones que se realicen desde la preparación de la elección hasta antes de la instalación de la Asamblea General Comunitaria;

c) Los **resultados**, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría;

d) La **nulidad de la votación o la nulidad de la elección**;

e) Las **determinaciones sobre el otorgamiento de las Constancias de Mayoría**; y

f) Los **resultados consignados** en las actas de la Asamblea General Comunitaria de elección de concejales a los ayuntamientos agentes municipales y de policía, así como de representantes de rancherías, núcleos rurales, barrios y colonias, **por error grave o por error aritmético.**"

"Artículo 91.

El Tribunal es competente para conocer y resolver el Juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos.

Artículo 92.

1. Las sentencias que recaigan en el Juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos podrán tener los siguientes efectos:

a) **Confirmar, modificar o revocar el acto impugnado**;

b) **Declarar la nulidad de la votación emitida para la elección de concejales a los ayuntamientos, agentes municipales y de policía que se rigen bajo Sistemas Normativos Internos, en consecuencia, modificar o revocar la constancia de mayoría o el acta respectiva**;

c) **Revocar la constancia expedida a favor de un candidato o de una planilla que resulte ganadora, derivado de la anulación de la votación emitida y modificar, en consecuencia, el acta respectiva**;

d) **Hacer la corrección del cómputo municipal cuando sea impugnado por error aritmético.**

2. Los Juicios electorales de los Sistemas Normativos Internos serán resueltos por el Tribunal dentro de los quince días siguientes a aquel en que se admitan. En casos urgentes, la sentencia debe dictarse con la oportunidad necesaria para hacer posible, en su caso, la reparación de la violación alegada.

3. Las sentencias dictadas por el Tribunal son definitivas."

“Artículo 94.

*Las nulidades establecidas en este Título **podrán afectar** la votación emitida en la elección de concejales a los ayuntamientos, agentes municipales y de policía, así como de representantes de rancherías, núcleos rurales, barrios y colonias y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada.”*

“Artículo 96.

*Preservando las normas, principios, instituciones, procedimientos y prácticas tradicionales de elección de las autoridades municipales, de los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 79 de esta ley, podrá **declararse la nulidad de la votación recibida o la nulidad de una elección** cuando haya quedado plenamente probado y sean determinantes para el resultado de la elección, irregularidades graves, no reparables en la elección que violen en forma alguna los principios de legalidad, libertad, certeza, imparcialidad, autenticidad y universalidad en la emisión de voto.*

Artículo 97.

También será nula una elección cuando todos los integrantes de la planilla de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

Artículo 98.

*El **juicio para la protección** de los derechos político electorales de la ciudadanía establecida en este apartado, es el juicio procedente cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o a través de su representante legal, haga valer **presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones en los municipios y comunidades que se rigen bajo Sistemas Normativos Internos.**”*

“Artículo 102.

*El **Tribunal es competente** para conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos.”*

Artículo 108.

1. Las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, serán definitivas y podrán tener los efectos siguientes:

a) Confirmar el acto o resolución impugnado; y

b) Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir al promovente en el uso y goce del derecho político electorales(sic) que le haya sido violado.

2. Las sentencias recaídas a los juicios para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos serán notificadas:

a) Al actor que promovió el juicio, y en su caso, a los terceros interesados, a más tardar dentro de los dos días siguientes al en que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando haya señalado en la ciudad sede de este Tribunal. En cualquier otro caso, la notificación se hará por correo certificado, por telegrama o por estrados; y

b) A la autoridad u órgano partidista responsable, a más tardar dentro de los dos días siguientes al en que se dictó la sentencia, por oficio acompañado de la copia certificada de la sentencia."

5. Conclusiones. De estas atribuciones anteriores, se pueden distinguir dos ámbitos de actuación, a saber:

I. La del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de orden administrativo-electoral vinculada a la verificación de los requisitos constitucionales y legales² de los comicios que se celebran mediante el régimen de Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas, y conforme a los cuales han de determinarse la validez de tales elecciones.

Así como la relativa a su intervención por conducto de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, en la búsqueda de medidas alternativas que contribuyan a la resolución de conflictos derivados de sus

² Artículo 263, párrafo 1, fracciones I, II, III del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

comicios internos, para establecer los procesos de mediación a fin de alcanzar la avenencia de las partes, y por ende la resolución del conflicto.

II. La del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de carácter puramente jurisdiccional, que se desarrolla mediante la resolución, en forma definitiva, de los medios de impugnación de carácter contencioso, previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, los cuales tienen como finalidad garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.

Cuestión que en esencia constituye el sistema integral de justicia en materia electoral, dentro del cual se prevé la garantía de un efectivo acceso a la jurisdicción del Estado a los ciudadanos indígenas, a que hace referencia la Jurisprudencia 7/2013, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben:

Herminio Quiñónez Osorio y otro

VS

LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otro

Jurisprudencia 7/2013

PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 4, párrafo primero y 17, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se debe garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas "el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado", que los tribunales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como el que se garantice la independencia judicial y la plena ejecución de sus resoluciones, lo que obliga a tener un mayor cuidado en la aplicación de las causas de improcedencia que se prevén expresamente en la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral y las que derivan de la normatividad aplicable en la materia. En ese tenor, una intelección cabal del enunciado constitucional “efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”, debe entenderse como el derecho de los ciudadanos que conforman las respectivas comunidades indígenas a lo siguiente: a) La obtención de una sentencia de los órganos jurisdiccionales del Estado; b) La real resolución del problema planteado; c) La motivación y fundamentación de dicha decisión jurisdiccional y, d) La ejecución de la sentencia judicial. Esta última conclusión se apunta porque los integrantes de dichas comunidades deben tener un acceso real a la jurisdicción del Estado, no virtual, formal o teórica, por lo que se debe dispensar una justicia en la que se puedan defender sin que se interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescinda de sus particulares circunstancias, ya que la efectividad de la administración de justicia electoral debe traducirse en un actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una resolución o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios, para que, en forma completa y real, el órgano jurisdiccional decida materialmente o en el fondo el problema planteado.

5ta Epoca:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y otro.—10 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-9167/2011.—Actores: Rosalva Durán Campos y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.—2 de noviembre de 2011.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1640/2012.—Actor: Andrés Nicolás Martínez.—Autoridades responsables: Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y otras.—30 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada.

Notas: El contenido del primer párrafo del artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se interpreta en la presente tesis,

corresponde con el 2.º, Apartado A, fracción VIII, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de junio de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 19, 20 y 21.

Adicionalmente a lo antes planteado, es conveniente aclarar que sólo podrá ejercer una carga competencial específica un órgano de autoridad que encuentre su existencia jurídica en un ordenamiento legal, es decir, las autoridades no existen *-per se-*, sino que se hace necesario que se encuentren reguladas por el orden jurídico que les resulte aplicable al caso concreto.

En tal sentido, debe establecerse que la naturaleza misma del asunto cuestionado impide a este órgano administrativo instaurar un proceso jurisdiccional con todas sus fases y formalidades, toda vez que se encuentra desprovisto de la potestad, jurisdicción y competencia, para atender y resolver el asunto de fondo que se le plantea y, en su caso, ordenar la reparación del daño o de la afectación a la esfera jurídica de la parte compareciente.

En efecto, toda actuación autoritaria, sin excepción, debe de encontrarse fundamentada en un precepto jurídico que directa e innegablemente la regule, pues si no existe este sustento legal, el proceder de la autoridad será contrario a derecho, y en la especie, el órgano administrativo electoral resulta incompetente para resolver el fondo del asunto cuestionado.

Lo que equivale a decir que esta autoridad administrativa electoral se encuentra desprovista de la potestad para determinar sobre el planteamiento que formulado en los escritos que se atienden. De estimar lo contrario, se estaría ante la presencia de una violación a los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es así lo anterior, debido a que en el procedimiento alternativo para la resolución de conflictos no se rige por Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ni se instaura a partir de la interposición de medios de impugnación previstos por la ley, dentro de los cuales las pretensiones formuladas pudieran alcanzarse con la emisión de una sentencia que repare la afectación jurídica planteada.

Por el contrario, el procedimiento alternativo que se impone a desarrollar a este órgano, cuando existan controversias, se rige por las disposiciones prevista en los artículos 264, 265 y 266 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, por lo tanto, la avenencia de las partes es el elemento *-sine qua non-* para que este órgano administrativo electoral se encuentre en condiciones de solucionar conflicto por esta vía.

Sin embargo, toda vez que el proceso de mediación intentado concluyó, sin alcanzar la avenencia de las partes, este órgano administrativo electoral estimó pertinente determinar la calificación de la elección que nos ocupa.

Ahora bien, en el caso sometido a estudio, los comparecientes sostienen irregularidades relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas por la comunidad, cuando afirman: que no se sometió a consenso de la asamblea, celebrada el día 01 de septiembre de 2013, todos los puntos de la convocatoria; y que los candidatos se registraron sin respetar la convocatoria.

Al respecto, debe decirse que en las irregularidades antes precisadas se formulan violaciones a las normas determinadas por la comunidad para la renovación de sus propias autoridades municipales.

Por lo tanto, su estudio en el momento de la calificación de la elección resulta competencia de órgano administrativo, debido a la conexidad existente entre los planteamientos formulados y las disposiciones previstas por la fracción I, párrafo 1, del artículo 263 del Código.

Una vez destacado lo anterior, de la lectura integral del acta de la asamblea verificada el día 01 de septiembre de 2013, se observa, con una claridad meridiana, que durante el desarrollo de la asamblea se procedió

con la lectura a la convocatoria, asimismo, que fue aprobada por los asistentes, sin que se mencione en el acta las omisiones a que hacen referencia los comparecientes.

Por lo que hace al registro de candidatos, de igual manera omitieron señalar con precisión los puntos de la convocatoria que, a su juicio, no se habrían respetado, no obstante, este órgano procedió con la revisión de convocatoria sin que se advirtiera de forma evidente algún incumplimiento a las bases como lo sostiene la parte inconforme, por lo tanto, es de concluirse que en la especie los planteamientos formulados resultan inoperantes para producir la pretensión de invalidez de la elección.

En otro aspecto, los comparecientes enrolan manifestaciones relativas a: que hubo ciudadanos que votaron dos veces, ya que no se uso tinta indeleble; que no se respeto el acuerdo de la asamblea de pedir credencial de elector a los menores de edad (sic); que existió desorden, donde se encontraba el pizarrón; que falto vigilancia estricta de la policía municipal, a la hora de votación; que hubo agresores, contra los integrantes de la mesa de debates; que hubo ciudadanos pegados al pizarrón, induciendo el voto a favor de uno de los candidatos. Dichos planteamientos constituyen meras manifestaciones, que al ser contrastadas con los elementos que obran en el expediente, no se encuentran los elementos mínimos necesarios para acreditar plenamente su existencia.

Además, con total independencia de que dichos planteamiento resultan vagos e imprecisos, en ellos, se perciben elementos de naturaleza jurisdiccional, los cuales se encuentran íntimamente vinculados con hipótesis de nulidad y los medios de impugnación previstos en el Libro Tercero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, denominado: “De los Medios de Impugnación y las Nulidades en las Elecciones de municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos”.

Sobre esta situación, debe recordarse que el efectivo acceso a la justicia de los ciudadanos indígenas, solo es posible alcanzarlo mediante la vía del proceso judicial, entendiéndose en todo momento a sus etapas, reglas y formalidades del mismo, cuestión que no recae en la esfera jurídica de

este órgano administrativo electoral, en términos de las consideraciones ya precisadas con anterioridad.

En consecuencia, a partir de las disposiciones del sistema jurídico antes descrito, este órgano administrativo electoral debe concluir que no ha lugar a determinar la nulidad de la elección por la cual resultó electo como Presidente Municipal el ciudadano Cayetano Hilario García Hernández, en virtud de que carece de jurisdicción y competencia acceder a la nulidad de dicho proceso con las razones formuladas por los compareciente.

Por lo tanto, es pertinente proceder con la verificación de los requisitos de validez de la elección celebrada el 22 de septiembre de 2013.

C. DE LOS REQUISITOS PARA EMITIR LA DECLARACION DE VALIDEZ

Sobre las bases antes precisadas, este Consejo General procede al análisis del desarrollo del proceso electoral, conforme con las etapas y actos que lo integran, incluso de aquellos que aunque formalmente no se efectuaron en él, tienen una vinculación directa con el mismo:

1. El apego a las normas establecidas por la comunidad o los acuerdos previos. En términos de lo indicado por el artículo 263, párrafo 1, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, debe ponderarse primeramente que la elección se haya apegado a las normas establecidas por la comunidad y, en su caso, a los acuerdos previos.

En ese tenor, debe decirse que las normas, procedimientos y prácticas que se llevan a cabo al interior de las comunidades indígenas para la elección de sus representantes, se estiman como disposiciones particulares de orden electoral para la propia comunidad, debido a que es así como se materializa la libre autodeterminación de las comunidades indígenas que consagran los artículos 2, de la carta magna y 16 de la Constitución Local. Así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

Bajo esa premisa, del estudio integral del expediente no se advierte incumplimiento alguno a las reglas de la elección establecidas por la

comunidad, mismas que se materializaron en la convocatoria particular de la elección y demás documentales que obran en el expediente.

2. Que la autoridad electa haya obtenido la mayoría de votos. Por su parte, el artículo 263, párrafo 1, fracción II, del Código citado, impone el imperativo al Consejo General de revisar que los concejales electos hayan obtenido la mayoría de votos.

En concordancia, debe decirse del acta de la jornada electoral se desprende el número de votos recibidos por cada contendiente, precisándose además de forma individualizada por cargos, que los concejales municipales electos obtuvieron la mayoría de votos. Cuestión que puede corroborarse con las documentales levantadas el día de la jornada electoral, mismas que contienen las firmas o huellas digitales de los ciudadanos que participaron en la misma, y que se encuentran agregadas al expediente.

3. La debida integración del expediente. Por último, el artículo 263, párrafo 1, fracción III, del Código, determina el deber al Consejo General de revisar la debida integración del expediente.

De acuerdo con las documentales que obran en el expediente, a juicio de este Consejo General se encuentra debidamente integrado en la elección que nos ocupa, dado que contiene, entre otros, la convocatoria en las que se establecen las reglas particulares de la elección, los acuerdos previos y las actas levantadas durante la jornada electoral.

4. De los derechos fundamentales. De igual forma, este Consejo General no advierte de forma evidente la violación a algún derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, como son el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, el derecho de auto determinación para elegir a sus autoridades comunitarias, entre otros.

De la misma manera, no se advierte la existencia de alguna determinación contraria o incompatible con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni violación alguna a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

5. Requisitos de elegibilidad. Los ciudadanos electos satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca; y 258, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, así como los previstos en los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas participantes.

Lo antes expuesto, permite a este Consejo General concluir que ha lugar a emitir la declaratoria de la validez de la elección que nos ocupa y ordenar la emisión de las constancias respectivas.

Ante tales circunstancias, con fundamento en las consideraciones precedentes, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se declara válida la elección de concejales municipales del Ayuntamiento de Santa Catarina Mechoacán, Oaxaca.

SEGUNDO. Expídase la constancia respectiva a los ciudadanos electos como concejales municipales, que a continuación se precisan:

CARGO	CONCEJALES ELECTOS	
	TIPO	NOMBRE
Presidente Municipal	Propietario	Cayetano Hilario García Hernández
	Suplente	Gabriel Bruno Mejía García
Síndico Municipal	Propietario	Antonio Rodríguez Ávila
	Suplente	Arnulfo Hernández García
Regidor de Hacienda	Propietario	Francisco Sabino Nicolás Castañeda
	Suplente	José Quiroz Martínez
Regidor de Obras	Propietario	Santiago Eleuterio de Olmos Cajero
	Suplente	Felipe Lucas Hernández
Regidor de Educación	Propietario	Calixto Juan Hernández Cajero
	Suplente	Eneida Eloina Jarquín Galindo
Regidor de Salud	Propietario	Rufina Quiroz Gómez
	Suplente	Nazario Celestino Hernández Hernández

TERCERO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo indicado por los artículos 15 párrafo 2, y 34, fracción XII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para ese fin expídase por duplicado este acuerdo. Así mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

NOTIFÍQUESE este acuerdo, por oficio, al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, para los efectos legales pertinentes.

Así lo resolvieron por unanimidad votos de los miembros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, siguientes: Licenciado Víctor Leonel Juan Martínez, Consejero Electoral; Maestro Juan Pablo Morales García, Consejero Electoral; Licenciada Alba Judith Jiménez Santiago, Consejera Electoral; Licenciado Víctor Manuel Jiménez Vilorio, Consejero Electoral; Licenciada Norma Iris Santiago Hernández, Consejera Electoral; Maestro David Adelfo López Velasco, Consejero Electoral, y Maestro Alberto Alonso Criollo, Consejero Presidente, en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día veintiuno de diciembre del dos mil trece, ante el Secretario General, quien da fe.

POR ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO

ALBERTO ALONSO CRIOLLO

FRANCISCO JAVIER OSORIO ROJAS